

CRISIS POLÍTICA

Se dice con frecuencia en los análisis políticos que los momentos de crisis se ofrecen siempre como una pérdida de legitimidad a cargo de los grupos dominantes. Le antecede a este quebranto una merma sustancial en la credibilidad ante las mayorías o sectores numerosos de éstas. Si nos atenemos a estas caracterizaciones, en México se transita por uno de estos tiempos. El crimen de Iguala tuvo el impacto suficiente como para sacar a flote viejas tensiones entre las clases, agravios resentidos por los de abajo, debilidades e imposturas entre las élites gobernantes. De pronto, el dolor e indignación causados por el asesinato de los estudiantes y las exigencias de justicia expuestos en centenares de movilizaciones que abarcan todo el territorio nacional, descubrieron la carne viva del sistema.

El secuestro y asesinato de los normalistas, se produjeron en una secuencia de hechos que por sí mismos descalificaron a las autoridades de los diversos niveles y al mismo modelo de partidos políticos. La incomprensible inacción de las autoridades locales del estado de Guerrero y de las federales acantonadas en esa entidad para detener a los matones vestidos como policías. Después, la tardanza en emprender averiguaciones serias y el inverosímil desconocimiento sobre la suerte de los alumnos desaparecidos, cuando tuvieron en sus manos desde un principio a los autores directos de los delitos. Por último, la versión difundida por el Procurador de la República, afirmando que las víctimas fueron asesinadas en un basurero y luego incineradas, ofreciendo como único sustento la confesión de dos miserables sicarios.

El deterioro de credibilidad en las instituciones, no se circunscribe a la masacre de Iguala. Justo cuando junto con la perplejidad inicial, el coraje y la protesta crecieron como bola de nieve en el país, salió a la luz el caso de la ya célebre casa blanca, valuada en varios millones de dólares.

Nunca como ahora, el tráfico ilegal con los dineros del Estado y la complicidad con los contratistas privados, habían alcanzado la cúspide de la pirámide gubernamental, es

decir, al mismo Presidente de la República. Es el resultado del imperio de la frivolidad, el consumismo, el afán por lo suntuoso y superfluo impropios de gobernantes republicanos e incompatibles con las miras de un Jefe de Estado. El descrédito de las autoridades, antecede al divorcio entre éstas y los gobernados. Estamos pisando el terreno de la crisis política, que hace aflorar a todas o buena parte de las contradicciones subyacentes en la sociedad. Uno de los peligros gravísimos es que en la desesperación se acuda al uso de las armas para tratar de aplacar a los inconformes crecientes en número. En las circunstancias actuales, un acto de represión mayor nos precipitaría en el abismo de una fase de guerras civiles a cuyo término acabaríamos en un país desangrado y debilitado.

La otra salida a la crisis exige cambios sustanciales en la conducción y rumbo del Estado. La demanda central en las protestas sociales de estas semanas es la exigencia de justicia. Sin embargo, al mismo tiempo han logrado movilizar y hacer conciencia de la necesidad del cambio profundo a porciones crecientes de la sociedad, más allá de los que guardan mayor sensibilidad a la tragedia, como son los estudiantes y los profesores.

Si tenemos claras, al menos algunas de las causas provocadoras de la debacle política, este amplio movimiento debe construir una bandera en la cual se condensen las aspiraciones de un genuino gobierno republicano. La inseguridad, el irrespeto por la vida de las personas florecen allí donde campean la deshonestidad, la corrupción, el despilfarro. Estos cánceres se extienden a todo el cuerpo político del Estado y cada medida dirigida contra tales tumores debe ser considerada. Una de las reformas indispensables debe dirigirse al sistema de partidos políticos. La sociedad les ha confiado una tarea vital, que es la conformación de los órganos del Estado, en cuyo cumplimiento fallaron en toda la línea. Requerimos otras instancias ciudadanas.